



## **SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL**

**Radicado n.º:** 05001-31-05-002-2022-00338-00 (CC-22-3074)  
**Demandante:** AFP PROTECCIÓN S.A.  
**Demandada:** MILTON CASTRO MC OBRAS CIVILES S.A.S.  
**Providencia:** AUTO INTERLOCUTORIO No.076 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2022  
**Asunto:** CONFLICTO DE COMPETENCIA TERRITORIAL

En Medellín, a los catorce (14) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022), la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, quien actúa como Magistrado Sustanciador, decide el conflicto de competencia negativo suscitado entre el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ejecutivo laboral adelantado por PROTECCIÓN S.A. en contra de MILTON CASTRO MC OBRAS CIVILES S.A.S.

### **1. ANTECEDENTES**

Por intermedio de apoderada judicial, PROTECCIÓN S.A. pretende que se libre mandamiento ejecutivo de pago contra MILTON CASTRO MC OBRAS CIVILES S.A.S. por las sumas de \$18.512.760 por concepto de capital adeudado por aportes en pensión, de \$5.420.700 por concepto de intereses moratorios al 14 de junio de 2022 y los que se causen hasta la fecha de pago efectivo de la obligación, así como el pago de las costas procesales, con fundamento en que la sociedad demandada cuenta con trabajadores afiliados a dicha AFP, correspondiéndole al empleador efectuar oportunamente las autoliquidaciones de los respectivos aportes en pensiones, habiendo incumplido dicha obligación en la suma de \$23.933.460, según el título ejecutivo aportado; y que la demandada no atendió los requerimientos efectuados por la AFP para que solucionara dicha deuda por aportes en pensiones ni ha cumplido con el reporte de las novedades.

#### **1.1. TRÁMITE DE INSTANCIA**

La demanda dirigida al "**JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGUI**" (sic), fue presentada el día 6 de julio de 2022 (docs. 02), la que correspondió por reparto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí (doc. 01), cuya titular mediante providencia del 13 de julio de 2022 (doc.

04) se declaró incompetente para conocer la demanda, ordenando su remisión a los juzgados laborales del circuito de Medellín, por considerar que "(...) el lugar en donde se efectuó el título ejecutivo, por medio de la cual declara la obligación de pago de las cotizaciones adeudadas es la ciudad de Medellín, como puede visualizarse del requerimiento previo al deudor anexado con el escrito de demanda (documento electrónico 03Demanda pág. 22-35); acorde a lo dispuesto de manera precedente, el competente para conocer del presente trámite es el Juez Laboral del Circuito de Medellín, por ser el domicilio principal de la sociedad ejecutante, y ciudad en la que se creó el título ejecutivo base de recaudo. En consecuencia, (...), se debe DECLARAR LA FALTA DE COMPETENCIA, y se ordena la remisión del expediente a los Juzgados Laborales del circuito de Medellín (Ant), para que asuman el conocimiento. (...)."

## 1.2. PROPOSICIÓN DEL CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA.

A su turno, el proceso fue repartido al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín (doc. 06), el que por decisión del 23 de agosto de 2022 (doc. 07) propuso el conflicto negativo de competencia, al considerar que "(...)el título ejecutivo No.14764-22 que milita a folios 13 del anexo 3 del expediente digital, fue expedido por la parte demandante el 23 de junio de 2022 en el **municipio de Itagüí**; que la parte demandante adelantó el requerimiento por mora de Aportes a Pensión Obligatoria a la demandada, en la carrera 47 No.50-48 interior 501 del **municipio de Itagüí**, Antioquia. (fls.22 anexo 3 E.D.). (...) Así mismo, que según el Certificado de Existencia y Representación legal de la CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR, el domicilio de la demandada, es la calle 70 No.51-17 del **municipio de Itagüí**, con dirección para notificaciones judiciales, carrera 47 No.50-48 interior 501 del mismo municipio (fls.36-41 anexo 3 E.D.) (...) Así las cosas, considera el despacho que el Juzgado competente para conocer del presente proceso ejecutivo laboral es el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO del municipio de Itagüí, por cuanto fue allí donde se emitió la cuenta de cobro, además es el domicilio de la demandada y fue allí donde la demandante hizo el requerimiento por mora a la Pensión obligatoria a la sociedad ejecutada."

## 2. TRÁMITE EN SALA

Propuesto como se encuentra el conflicto negativo de competencia y al no avizorar la Sala circunstancia que pueda dar lugar a la declaratoria de nulidad procesal, corresponde a esta Corporación Judicial emitir una decisión de fondo, para lo cual esta Colegiatura estima conveniente efectuar las siguientes:

## 2.1. CONSIDERACIONES

De conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, y en el Acuerdo n.º 108 del 14 de agosto de 1997, corresponde a esta Sala dirimir el conflicto de competencia que se presente entre jueces de la especialidad laboral adscritos al distrito judicial de Medellín.

En orden a lo anterior, se tiene que las pretensiones de la demanda deben tramitarse por la vía ejecutiva laboral, tal y como lo dispone el numeral 5 del artículo 2 del CPT y de la SS, al tratarse de la ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no corresponden a otra autoridad.

Al punto, importa resaltar que el numeral 3º del artículo 28 del CGP, aplicable en materia laboral por analogía de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145 del CPT y la SS, dispone que:

*“(...) En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita (...)”*

En igual sentido, ha de relievase que a partir de la providencia AL2940-2019, reiterada en las providencias AL1046-2020, AL228-2021, AL2089-2022 y más recientemente la AL4402-2022, entre otras, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia memoró que:

*“(...) En el caso bajo examen, si bien no existe una norma en materia procesal del trabajo que consagre de manera clara y precisa la competencia para conocer del trámite de la acción ejecutiva del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, encaminada en esta oportunidad al cobro de cotizaciones al Subsistema de Seguridad Social en Salud, lo cierto es que por aplicación analógica conforme lo permite el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la regla que se adapta es la establecida en su artículo 110, puesto que determina la competencia del juez del trabajo en asuntos de igual naturaleza, es decir, en los que se busca garantizar los derechos a la seguridad social de los afiliados a través del cobro ejecutivo a los empleadores de aquellas cotizaciones que no fueron satisfechas oportunamente.*

*La citada norma señala:*

*Juez competente en las ejecuciones promovidas por el Instituto de Seguros Sociales. De las ejecuciones de que trata el artículo anterior y el 32 de la Ley 90 de 1946 conocerán los jueces del trabajo del domicilio del Instituto Colombiano de Seguros Sociales o de la caja seccional del mismo, que hubiese proferido la resolución correspondiente y de acuerdo con las reglas generales sobre competencia por razón de la cuantía.*

*Debe precisarse entonces, que el transcrito precepto adjetivo legal, además, es el aplicable al caso, porque para la época de expedición del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (año 1948), la única entidad administradora del Sistema de Seguridad Social lo era el Instituto de Seguros Sociales, mientras que, con la Ley 100 de 1993, se originó la creación de diferentes administradoras de los subsistemas que lo integran, sin que se determinara tampoco, como se anunció precedentemente, en quién recaía la competencia para conocer de la ejecución por cotizaciones a la seguridad social insolutas, situación que como se dijo, sí estaba prevista en su momento para el ISS, y que en tal virtud, resulta ser la más cercana para dilucidar el presente conflicto."*

Precedente judicial a partir del cual refulge palmar que en tratándose de la ejecución de los aportes obligatorios en pensiones, la competencia ha de radicarse "(...) en el juez del lugar del domicilio de la entidad de seguridad social o el de aquel en el que se profirió la resolución o el título ejecutivo correspondiente que puede coincidir con aquél (...)" (AL4402-2022).

A partir del recuento legal y jurisprudencial en cita, y descendiendo al *sub lite*, tenemos que la sociedad ejecutante fundamenta su solicitud de ejecución en el "Título Ejecutivo No. 14764 – 22" (doc. 03 págs. 13 a 21), y no en el documento mediante el cual se requirió al empleador para el pago de los aportes en mora previo a instaurar el proceso ejecutivo (doc. 03 págs. 22 a 35), como erróneamente estimó el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí (doc. 04 pág. 2), en la medida en que tal requerimiento constituye apenas un acto preparatorio para la expedición del título ejecutivo, pero no constituye un título ejecutivo *per se*, como pareció entenderlo el despacho judicial en comentario.

Luego, verificado el título ejecutivo anejo con la demanda ejecutiva, se observa que en el "Lugar y Fecha de Expedición del Título Ejecutivo", se indica que lo fue en el Municipio de "ITAGUI" (sic), el "23 de junio de 2022" (doc. 03 pág. 13).

Ahora bien, ha de relieves la Sala, que independientemente del domicilio de las partes, lo cierto es que en los casos en los que la demanda puede ser conocida por dos (2) o más jueces, lo que se conoce doctrinariamente como "*fuero electivo*", es que el promotor del juicio quien puede optar por el a bien tenga, siendo que en el *sub studium* es más que evidente que Protección S.A. optó por adelantar el presente proceso en el Municipio de Itagüí (docs. 01, 02 y 03 pág. 2), resultando entonces verdaderamente adjetiva la razón por la cual este despacho decidió remitir las diligencias al circuito laboral de Medellín.

De suyo que, la competencia para conocer y decidir el proceso de la referencia está radicada inequívocamente en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí, y así se declarará por la Sala.

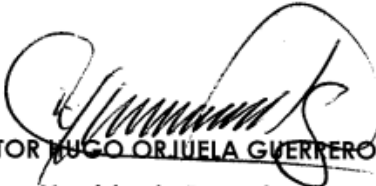
En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**3.RESUELVE:**

**PRIMERO: DECLARAR** que el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGÜÍ, es el competente para conocer la demanda ejecutiva laboral promovida por PROTECCIÓN S.A. contra MILTON CASTRO MC OBRAS CIVILES S.A.S., según y conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

**SEGUNDO:** En consecuencia, remítase el expediente contentivo de la demanda ejecutiva laboral promovida por PROTECCIÓN S.A. contra MILTON CASTRO MC OBRAS CIVILES S.A.S. al JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGÜÍ, el que debe asumir el conocimiento de la misma.

**TERCERO:** Informar lo resuelto en este proveído al JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN.

  
VÍCTOR HUGO ORIUELA GUERRERO  
Magistrado Ponente

  
MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA  
Magistrada

  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE  
Magistrada

  
RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS  
Secretario

**CONSTANCIA SECRETARIAL**

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

  
RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS  
Secretario

**LA SECRETARIA DE LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL  
SUPERIOR DE MEDELLÍN CERTIFICA:**

Que esta providencia fue notificada en los  
**ESTADOS No.226**, fijados en la secretaría del  
Tribunal, hoy **15 de diciembre de 2022** a las  
08:00am, los cuales pueden ser consultados en  
["Publicación de Estados Electrónico SL-TSM"](#)

**RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS**  
Secretario